

Carlos Ruiz Encina

El estallido no coincide ni se origina en una crisis política, tampoco económica, como suele suceder en América Latina en las últimas décadas. Es una crisis eminentemente social, que luego, con la pandemia, escala a una crisis económica y a una polarización política que, a pesar de ello, no constituye un correlato institucional de la polarización social existente. Esto significa que sus orígenes se anclan eminentemente en las condiciones de reproducción social vigentes, en especial, en ese distintivo grado de mercantilización y privatización que alcanzan, bajo un régimen de “responsabilidad individual” que abre incertidumbres y crisis de racionalidad que terminaron por estallar.

Una crisis social que viene manifestándose hace prácticamente una década y media, de modo sectorial y termina por confluir en una sola revuelta, pero sin representación política. La esfera política propia del régimen de la transición acusa un enorme grado de ensimismamiento, puesto en la imagen de Lechner. De ahí emana una crisis de representación, un abismo entre política y sociedad, con las tasas de participación electoral más bajas del continente, la proliferación del llamado “voto cruzado” y del “voto castigo” como magras formas de participación, y la consiguiente disolución de “lealtades políticas duras” que redundan en la desaparición de grandes mayorías políticas; las nuevas fuerzas políticas tampoco dan cuenta de este problema, por lo que la situación atraviesa a todo el panorama político, sin distinción. Esto significa un grave déficit de procesamiento de conflictos de intereses que propende al “desborde de la política” (Beck), acentuando la desidentificación institucional y la crítica generalizada a todo tipo de élites (políticas, empresariales, eclesiásticas, militares y policiales, judiciales, etcétera). Pero no se trata solo de una desidentificación solo con la política, incluso con el Estado propiamente tal; a ello no escapan, tampoco, las organizaciones sociales tradicionales.

Es que la fisonomía de la sociedad chilena actual emana de una enorme transformación producto de los cambios estructurales e institucionales de la historia reciente. Lo más significativo es el ocaso de la clase media desarrollista y de la clase obrera industrial, esto es, de las bases sociales tradicionales de sustentación de proyectos políticos. La transición a la democracia abre paso a un régimen democrático de baja participación, una esfera política opaca (“la política de los acuerdos”), bajo una ensoñación elitaria con una utopía de política sin sociedad. Los viejos actores sociales palidecen y, durante la primera década de gobiernos civiles, no hay mayores demandas sociales organizadas. La política se divorcia de los procesos sociales, esa “opacidad social” que apunta la discusión francesa (Rosanvallon, Fitoussi, Castell).

Pero la formación de la nueva geografía continúa su paso, a pesar de la sordera de la política y la incapacidad de representación que aumenta. El nuevo panorama aparece marcado por formas de diferenciación social distintas a las tradicionales, producto, especialmente, de los extendidos procesos de privatización de la reproducción social (que invaden hasta predominar en áreas como educación, salud, pensiones, sanitarias, suelo y estructuras urbanas, y un largo etcétera). El nuevo trabajo desborda las formas tradicionales de socialización por el oficio y las formas que resultaban asociadas a la sindicalización y su institucionalización clásica, para sumirse en una deslocalización espacial y temporal que invade todo lugar y momento de la vida, haciéndose ubicuo sobre la cotidianidad, abriendo no solo tensiones y una desidentificación que crece con las

formas tradicionales de representación social y política, sino que, incluso una crisis cultural que afecta a los modelos de familia y a las formas de organización de la vida cotidiana y sus formas tradicionales de racionalidad y certidumbre, al trastocar las condiciones de sociabilidad mismas. Todo ello, en un panorama completamente carente de registros institucionales y, como tal, de procesamiento legítimo de tal carácter.

Quizás el caso más visible, por su intensa explotación ideológica, sea el de las llamadas nuevas clases medias que, en realidad, constituye una zona de la estructura social donde abundan más bien nuevas desigualdades y formas de diferenciación social. Al interior de lo que era tradicionalmente tenido por un campo clasista marcado por una distintiva certidumbre en sus proyecciones y un peso social, cultural y político en la sociedad, el mundo de los profesionales hoy, a diferencia de aquellos rasgos de hace medio siglo, ostenta una heterogeneidad marcada por nuevas desigualdades y formas de diferenciación social. Masiva y lucrativamente extendida la producción de profesionales, de muy diversa y desregulada calidad, apunta a mercados laborales rígidamente estratificados por barreras estamentales donde el mérito no suele imperar; sino, más bien, pesados mecanismos de eso que la sociología clásica llama “cierre social”. Allí, pues, no solo es absurdo hablar de una clase social, en el entendido de la connotación social, cultural y política del término (más que simple estrato económico, atado a ingresos volátiles, por lo demás), sino que expresa diferencias sociales y problemas que carecen de reconocimiento institucional y de representación política, por parte de unas esferas, estas últimas, completamente desfasadas ante los acelerados cambios de la sociedad chilena.

A la protesta no solo confluye la pobreza. Esa reducción no calza con la masificación vista, ni los grados de apoyo que alcanza. Es un absurdo ideológico tal reducción. Por el contrario, sectores como estos nuevos profesionales, de condiciones de reproducción social marcadas por la incertidumbre, la crisis de expectativas y las consiguientes frustraciones, también engrosan masivamente dicha protesta, haciendo eclipsar la manida propaganda del oasis que agitaba la imagen sociocultural de las antiguas clases medias, para apuntarlos hoy.

[La verdad es que, la experiencia neoliberal ortodoxa chilena, lejos de crear nuevas clases medias, incluso ha destruido en buena medida a las antiguas, sembrando en ese ámbito de la estructura social una zona gris de que plantea dilemas comprensivos a lo que se llamó imaginación sociológica: en un panorama social nuevo.](#)

Es que, con el cambio de siglo asoma gradualmente una protesta social distinta a la tradicional, en dinámicas sectoriales (educación, pensiones, medioambientales y antiextractivista, de género, libertades sexuales, etcétera). Anclada preferencialmente en las nuevas desigualdades e incertidumbres, mudas ante la sordera institucional, se erige como una protesta social sin representación política ni de las viejas organizaciones sociales. La carencia absoluta e indistinta de representación política fue algo que el propio gobierno tardó mucho en comprender, para salir de la fantasía de su atribución a fuerzas de izquierda o del Frente Amplio, que carecían visiblemente de anclajes en dicho movimiento social; ello contribuyó a la difusión de absurdas confusiones por mucho tiempo, que no expresan más que la resistencia a las nuevas condiciones sociales y culturales.

Por el contrario, precisamente de esas carencias generalizadas de representación política e institucional en general, es que emerge esa característica demanda de reconocimiento. Los déficits de anclajes en un nuevo panorama social atraviesan a todo el espectro político. Es una protesta sin banderas políticas, oradores ni representantes, donde prima el individuo [haciéndose reclamando visibilidad](#), ser escuchado.

Ello apura una reorganización de la esfera política. Una puesta al día con los cambios sociales y culturales tan intensos y marcados en la sociedad. La derecha lo niega y, peor aún, renuncia a la política en tal negación; incluso, experimenta con ello una crisis interna que el control gubernamental por la vía de su reducción al formato de nuevo gabinete solo elude por un tiempo. De otro lado, viejas y nuevas izquierdas quedan superadas por un nuevo individuo que demanda no solo más Estado como forma tradicional de igualdad, sino también libertad individual, abriendo importantes tensiones con los idearios y las prácticas políticas tradicionales; que, a un mismo tiempo, va al mall y a la protesta, ignorando enjuiciamientos morales contruidos para otro tiempo.

Se trata del rodaje ya largamente arrastrado de nuevos patrones de individuación y de la emergencia de una nueva sociabilidad. Desde allí que, su falta de reconocimiento y procesamiento institucional, la consiguiente desidentificación que origina, ya no se extiende solo con la política y sus ofertas de representación de un extremo a otro, sino que también incluye al Estado. De tal suerte, el dilema entre Estado y mercado, apuntado por mucho tiempo como uno de los ejes fundamentales de las identidades políticas que movilizan la transición, hoy ya no explica el actual panorama. Ese ideologismo esgrimido en los extremos ideológicos de que, a más neoliberalismo menos Estado, terminó de desdibujarse a ojos de estos nuevos individuos, que contemplaron por décadas cómo el crecimiento sostenido del gasto social estatal no apuntaba a la reconstrucción de los servicios sociales y estatales y aquellas respectivas protecciones sociales; sino, más bien, bajo la forma de vouchers, bonos, becas y “gratuidades”, adoptaban la forma de un subsidio estatal a ofertas privadas que, bajo la forma de licitaciones y concesiones, captaban tales fondos originando una suerte de “capitalismo de servicio público”. Allí también palidecen los viejos términos del clivaje izquierda-derecha y sus formulaciones tradicionales de igualdad y libertad, en no poca medida vinculados a esos horizontes desdibujados de lo que significa tanto el Estado como el mercado.

Nada tiene de extraño, entonces, que, en este punto, emerja una noción de lo público diferenciado de lo estatal, así como una connotación de lo privado diferenciado del mercado, a manos de este nuevo individuo de la actual geografía chilena que ha estallado, lo que difiere con pesadas tradiciones históricas de la cultura política. La demanda histórica es, más bien, de actualización de la política. Si eso significa una oportunidad de ensanchar los horizontes de la deliberación racional de la sociedad, de la democracia como tal; también encarna riesgos que es preciso consignar. Si bien puede conducir a un régimen representativo más atento a su sociedad, especialmente a sus cambios de la historia reciente, respecto de los cuales guarda una pesada tardanza y reticencia producto de su aislamiento y encierro, el camino hacia tal objetivo puede verse nublado **por una suerte de suerte** de capitalismo de opinión que hoy, tras la protesta y su marcado desborde de una política ensimismada, parece sustituir a aquella institucionalizada demanda de los sindicatos y gremios por una desconfianza inorgánica que es portadora de cuotas importantes de nihilismo, las cuales aumentan y complejizan el desafío de representación de la política.

La protesta social **por sí sola** tiene un horizonte de obstrucción, incluso de juicio. Como se sabe, no formula una solución ante los problemas que abre y es **por sí sola** insuficiente. Aunque no se puede ignorar su potencialidad democrática embrionaria, es una suerte de soberanía del veto popular, de la primacía de grupos de interpelación, de la emergencia de formas políticas no convencionales, que tienen la cualidad de poner de

relieve la vida inmediata de la democracia, esos “patios traseros” de los que hablaba Lechner, ante la sordera de las élites.

Bajo la acentuada heterogeneidad social y cultural no cabe la sorpresa con esta diversidad inorgánica del malestar, que supera los marcos de las organizaciones sociales tradicionales y sus formas de institucionalización y de relación con la política. Una política encerrada que por décadas ha permanecido negada a la marcha de estos fenómenos sociales y culturales, que venían estallando desde hace al menos tres lustros en torno a cuestiones específicas y ahora confluyen en un solo curso gigantesco. Es imposible desconocer que sin el estallido y su enorme costo social no se habrían abierto las puertas para repensar los horizontes minimalistas con que ha sido concebida la democracia chilena desde la transición, y la forma en que allí se acomodaron Montescos y Capuletos.

Por cierto, realzar en forma unilateral y total estas dimensiones solo puede terminar propagando una desesperanza nihilista, muy propensa en el escenario actual. Reducir este proceso a una suerte de democracia de la sanción y el rechazo, significa quedarse en una noción de soberanía negativa del pueblo, que no facilita ni el entendimiento ni la dilucidación de una marcha consensuada a seguir por la sociedad. En fin, hace peligrar la instalación plena del principio político de la autodeterminación democrática de la sociedad. Lo que se ha abierto es una oportunidad histórica de tal autodeterminación que no está exenta de riesgos como éstos, donde la visión desilusionada de la política existente puede terminar convirtiéndose en una visión desilusionada de toda política. El desafío es tomar esta oportunidad de construir una democracia que supere la radicalidad de la denuncia, y restituya un ensanchamiento de la política como el campo de deliberación legítimo en el que resolver esta encrucijada histórica, sin delegarla en administradores con credenciales de “expertos” y pretensiones de reemplazar a una ciudadanía efectiva.

Ensancha la democracia es resituarse esa política que las élites volvieron opaca, como un horizonte que no posee un fin determinado a priori pero que cobija el empeño, nunca acabado, la porfía permanente de la condición humana, por instalar una conversación racional sobre la gran pluralidad de seres, el desafío que significa poder vivir juntos con dignidad y compartir la libertad.